



Rama Judicial
República de Colombia

JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BUCARAMANGA

Bucaramanga, dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022).

ACCIÓN DE TUTELA

RADICADO No. 680014105002-2022-00199-00
ACCIONANTE: MARTIN GUSTAVO VELASQUEZ FLOREZ C.C. 91.518.631
ACCIONADO: SALUD TOTAL EPS
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS SA
ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO A DECIDIR

En desarrollo del Art. 86 de la Carta política y de conformidad con el procedimiento consagrado en el Decreto 2591 de 1991, procede el Despacho a emitir Sentencia de Primera Instancia en lo que en Derecho corresponda dentro de la **Acción de Tutela** radicada la numero 680014105002-2022-00199-00 , instaurada por el señor **MARTIN GUSTAVO VELASQUEZ FLOREZ**, identificado con la C.C. 91.518.631, actuando en causa propia, en contra de **SALUD TOTAL EPS** y **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS SA**, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de **PETICION, DIGNIDAD HUMANA, SALUD, MINIMO VITAL** e **IGUALDAD**.

HECHOS

Manifestó el accionante presentar patología de **ARTROSIS DE RODILLA DERECHA**, razón por la que el día 25 de marzo de 2021 le fue practicado procedimiento quirúrgico de **ARTROSCOPICA DE RODILLA TERCER NIVEL** y desde entonces ha estado incapacitado de forma ininterrumpida obteniendo más de 260 días de incapacidad.

Que solicitó ante la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS SA el pago de incapacidades a partir del día 181 a lo que se dio respuesta negativa solicitando la radicación cierta documentación que debe ser suministrada por la EPS.

Por lo anterior, desde el 18 de abril de 2022, radicó derecho de petición ante SALUD TOTAL EPS solicitando lo siguiente:

“Solicito se expida en forma física y expedita, los siguientes documentos requeridos por la Administradora de Fondo de Pensiones COLFONDOS:

- 1. Carta de remisión de la EPS, entre el día 120 y 150 de incapacidad.*
- 2. Resumen de historia clínica, epicrisis desde el 25 de marzo del 2021, ordenada cronológicamente desde el inicio de la patología, no puede ser en medios magnéticos según decreto 1352 de 2013.*
- 3. Formato de rehabilitación integral. Con expedición no superior a tres meses, diligenciado por el médico tratante y/o por el rehabilitador, en el cual indica el concepto favorable de rehabilitación.*
- 4. Certificación o Sabana de comprobación de pago de incapacidades del día 1 al día 180 expedido por el EPS SALUD TOTAL, debe ser original y firmado por la entidad, debe contener la relación de todas las incapacidades liquidadas y pagadas, con su valor correspondiente del día 1 al 180 a cargo de la EPS SALUD TOTAL, importante de manera expresa registrar si las incapacidades fueron pagadas.*
- 5. Certificados originales emitidos y transcritos por la EPS SALUD TOTAL, con los días de incapacidad otorgados uno a uno, desde el día uno (01) al día 180.*
- 6. Certificados originales emitidos y transcritos por la EPS SALUD TOTAL, con los días de incapacidad otorgados uno a uno, después del día 181 expedidos por la EPS SALUD TOTAL, estos documentos deben venir firmados o con sello, para que la administradora pueda cancelar las incapacidades posteriores al día 181.”*

A la fecha de presentación de la presente acción no se había dado respuesta de fondo por parte de la accionada a la anterior petición.

PETICIONES

Tutelar los derechos fundamentales invocados y ordenar a SALUD TOTAL EPS dar respuesta al derecho de petición de 25 de abril de 2022.

Que se ordene a COLFONDOS radicar la solicitud de pago de incapacidades del accionante.

Que se ordene a SALUD TOTAL EPS el tratamiento integral de las patológicas del accionante.

ACTUACIÓN JUDICIAL

Una vez asumido el trámite se admitió la acción de tutela mediante auto de fecha 2 de junio de 2022 y se ordenó correr traslado a las accionadas a fin de que dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación se pronuncien de fondo al respecto.

En la misma providencia se negó medida provisional solicitada.

Una vez transcurrido el término legal otorgado se allegaron pronunciamientos de las accionadas en los siguientes términos:

- **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS SA:**
“Primero: Colfondos S.A., requirió al accionante, radicación de documentos necesarios dentro del trámite de estudio y pago de subsidio de incapacidad laboral, donde se pudiera evidenciar periodos de incapacidad superiores al día 180, sin embargo, a la fecha no hemos recibido los mismos.
Segundo: Colfondos S.A., a la fecha no cuenta con solicitud formal ni soportes para realizar estudio de reconocimiento y pago de incapacidades.
Tercero: Por lo expuesto se configura ausencia de causa por pasiva de Colfondos S.A, máxime cuando no se remite en el traslado de tutela soportes de que exista radicación previa de esta administradora.”
- **SALUD TOTAL EPS:** *“En cuanto a la pretensión de después del derecho de petición, se revisa en el sistema ENLACE y se evidencia que en el contacto 0419225224 se dio respuesta a derecho de petición al correo MARTINVF1982@GMAIL.COM*

Se realiza el envío de los soportes adjuntos a la respuesta de derecho de petición. Se adjuntan los respectivos soportes.

Se intenta contactar telefónicamente al protegido al número 31666009322 en diferentes oportunidades, pero no contesta. Se procede a realizar notificación vía correo electrónico de la consulta de envío de historias clínicas solicitadas.

SALUD TOTAL EPS-S ha venido autorizando todos los servicios incluidos dentro del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, que han sido ordenado según criterio médico por los diferentes profesionales adscritos a la red de prestadores de SALUD TOTAL – E.P.S. dando integral cobertura a los servicios médicos que el protegido ha requerido. La solicitud de atención médica integral se encuentra supeditada a hechos futuros e inciertos en el ámbito de la salud. Por norma cada uno de los requerimientos excluidos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC solicitados a la protegida deberían ser cargados en la plataforma MIPRES (en concordancia con la normatividad vigente) y analizados por parte de SALUD TOTAL EPS-S con el objeto de evaluar pertinencia médica aún más teniendo en cuenta que los recursos financieros de la salud son públicos.

...

Ahora bien, en cuanto al tratamiento integral solicitado por la accionante, pese a haberse demorados que SALUD TOTAL EPS-S ha garantizado el acceso a servicios de salud que ha requerido MARTIN GUSTAVO VELASQUEZ FLOREZ es improcedente que el juez de tutela impartiera órdenes a futuro e inciertas.”

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

La acción de tutela ha sido concebida como un mecanismo preferente y sumario para la defensa inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, lo cual implica que su efectividad radica en la posibilidad de que el Juez, si encuentra que en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien pide protección, imparta una orden para que aquel contra quien se intenta la acción actúe o se abstenga de hacerlo.

Corresponde al Despacho determinar si la accionada SALUD TOTAL EPS dio o no respuesta de fondo a la fecha, al derecho de petición radicado por el accionante el 18 de abril de 2022 y a su vez si la accionada COLFONDOS SA vulnero algún derecho fundamental del accionante.

DE LA LEGITIMACIÓN EN LA ACCIÓN DE TUTELA

Uno de los requisitos para analizar de fondo la procedibilidad de la acción de Tutela corresponde a la legitimación tanto por la parte accionante para interponer la acción que es equivalente a la legitimación por activa, la legitimación de la parte accionada para asumir el conocimiento de la situación que se suscita por la parte actora o legitimación por pasiva, como la legitimación del juez para conocer de las presentes diligencias.

De la legitimación del Juez de conocimiento para asumir el conocimiento de las diligencias.

La acción de tutela se estableció en el artículo 86 de la actual Constitución Política de 1991, como el medio más expedito y rápido para hacer cesar las acciones u omisiones que vulneran o amenazan un derecho fundamental; pero, se presenta como un instrumento de naturaleza subsidiaria y residual, es decir, sólo procede en ausencia de otros mecanismos adecuados de defensa, con la finalidad de otorgar protección inmediata a los derechos constitucionales fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares.

En este evento la queja va dirigida contra SALUD TOTAL EPS Y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS SA y frente al artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 y Artículo 1 Decreto 1883 de 2017, se advierte claramente que es procedente esta acción contra esta entidad, siendo este Despacho competente para resolverla, teniendo en cuenta que

el domicilio de la parte accionante se encuentra localizado en Bucaramanga, y por tanto al esperar una respuesta a su petición, es el lugar de su domicilio donde se están causando los efectos de la vulneración a su derecho fundamental.

De la legitimación por activa.

En el presente caso concurre el señor MARTIN GUSTAVO VELASQUEZ FLOREZ actuando en causa propia a solicitar la defensa de sus derechos fundamentales de PETICION. MINIMO VITAL, SALUD, DIGNIDAD HUMANA e IGUALDAD, lo que deja en evidencia que se cumple el requisito de la legitimación por activa, al haberse interpuesto este mecanismo constitucional por el directo interesado.

De la legitimación por pasiva.

La parte pasiva en el presente tramite se encuentra conformada únicamente por SALUD TOTAL EPS Y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS SA, de manera de manera que, al estar relacionadas ambas entidades con el trámite de reconocimiento y pago de incapacidades emprendido por el actor, las dos se encuentran legitimadas por pasiva para emitir un pronunciamiento de fondo al respecto.

DE LA NATURALEZA SUBSIDIARIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

El artículo 86 del Decreto 2591 de 1991 indica la naturaleza subsidiaria de la acción de Tutela, la cual procede por regla general solo cuando se han agotado los medios legales pertinentes.

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en Sentencia C-132 de 2018, con Magistrado Ponente: Dr. ALBERTO ROJAS RIOS:

“El inciso tercero de este artículo consagra el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se trata de una condición de procedibilidad del mecanismo concebido para la adecuada y eficaz protección de los derechos fundamentales. En desarrollo del artículo 86 superior, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991, establece que la acción de tutela será improcedente cuando existan otros medios de defensa judicial

eficaces para resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.

(...)

La Corte ha reiterado, entonces, que la acción de tutela procede cuando se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios; sin embargo, existen situaciones en las que puede demostrarse la ocurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable, razón por la que resulta urgente la protección inmediata e impostergable por parte de las autoridades correspondientes para evitar la afectación de un bien jurídicamente protegido. Sobre esta materia recientemente la Corporación ha expresado:

“En este sentido, la Corte ha determinado que la acción de tutela no procede como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, evento en el que el juez de tutela únicamente podrá suspender la aplicación del acto administrativo mientras se surte el respectivo proceso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (artículos 7 y 8 del Decreto 2591 de 1991).¹

De conformidad con lo anterior, se tiene que en este último evento, la persona que solicita el amparo deberá demostrar de forma suficiente la necesidad de la medida para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, cuyos elementos han sido fijados por la jurisprudencia constitucional de la siguiente manera: (i) que se esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”²

4.10. Como se observa, desde sus inicios hasta la actualidad la Corte Constitucional ha enseñado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, según sus pronunciamientos a pesar de la existencia de otros mecanismos judiciales llamados ordinarios es posible acudir al medio excepcional previsto en el artículo 86 superior, como ocurre cuando se trata de actos administrativos bien sean éstos subjetivos o de carácter impersonal, siempre y cuando los instrumentos judiciales comunes u ordinarios no cumplan con los criterios de eficacia e idoneidad requeridos para la adecuada protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados.”

Así las cosas, al encontrarnos frente al derecho fundamental de petición, se torna comprensible que la parte actora hubiere acudido de forma primigenia a la acción de Tutela con miras a procurar la defensa de su derecho fundamental, toda vez que de acudir a otra vía judicial se tendría que ver sometida a demoras injustificadas, que solo desgastaría el aparato judicial, lo que convierte a la tutela en la mejor opción para obtener una respuesta de fondo a sus requerimientos, sin tener que acudir al desgaste de un proceso ordinario ni verse obligada a incurrir en gastos procesales.

DE LA INMEDIATEZ EN LA ACCIÓN DE TUTELA

En Sentencia T-246 de 2015 Magistrado Ponente: MARTHA VICTORIA SACHICA MÉNDEZ se analiza el criterio de inmediatez en la acción de tutela determinando lo siguiente:

La Sentencia SU-961 de 1999³ dio origen al principio de la inmediatez, no sin antes reiterar, como regla general, que la posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que esta no tiene un término de caducidad. La consecuencia de ello es que el juez constitucional, en principio, no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo...

A partir de estas consideraciones, la Sala Plena infirió tres reglas centrales en el análisis de la inmediatez. En primer término, la inmediatez es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo 86 de la Constitución. En segundo lugar, la satisfacción del requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las circunstancias de cada caso concreto⁴. Finalmente, esa razonabilidad se

relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental.

(...)

Empero, la acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual⁵.

En ese orden de ideas, de acuerdo con las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional y las interpretaciones garantistas efectuadas sobre este principio, no se desprende la imposición de un plazo terminante para la procedencia del amparo, sino uno razonable y prudente que debe ser verificado por el juez, de acuerdo a las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean cada caso en concreto, máxime si el establecimiento de un plazo perentorio para interponer la acción de tutela implicaría el restablecimiento de la caducidad, con efectos contraproducentes sobre principios que inspiran la filosofía de la Constitución de 1991, tales como: i) el acceso a la administración de justicia; ii) la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; iii) la autonomía e independencia judicial; iv) la primacía de los derechos de la persona y; v) la imprescriptibilidad de los derechos fundamentales.

(...)

*Del anterior recuento jurisprudencial, la Sala Octava concluye que no existe un término establecido como regla general para interponer la acción de tutela, ni siquiera cuando se trate de tutelas contra providencias judiciales. Así, el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “...en algunos casos, **seis (6) meses** podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de **2 años** se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”⁶.*

Visto lo anterior, queda claro para este fallador que la parte actora cumple a cabalidad con el criterio de inmediatez al haberse interpuesto la acción de Tutela dentro de un término prudencial desde de la ocurrencia de la afectación a los derechos fundamentales de los cuales se invoca su protección.

DE LA CARENCIA DE OBJETO EN LA ACCION DE TUTELA

Para abordar esta temática se trae a colación la Sentencia T-038 de 2019 con Magistrado Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER, en la cual se señalan las causales para que se de la carencia actual de objeto en la acción de tutela:

“La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendría algún efecto o simplemente “caería en el vacío”¹. Específicamente, esta figura se materializa a través en las siguientes circunstancias²:

3.1.1. Daño consumado. Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se materialice el peligro³. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneración⁴ pues, esta acción fue concebida como preventiva mas no indemnizatoria.

¹ Corte Constitucional, sentencia T-519 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo) reiterada posteriormente en sentencias como la T-533 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-253 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), entre muchas.

² Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada) reiterada en la T-237 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras. || La sentencia T-237 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, señaló: “(i) Por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el resarcimiento del daño originado en la vulneración del derecho fundamental. (ii) Por hecho superado cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, es decir, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. En este último evento, es necesario demostrar que en realidad se ha satisfecho por completo la pretensión de la acción de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado. Así las cosas, cuando se presente alguna de las dos circunstancias señaladas, el juez de tutela puede declarar, en la parte resolutoria de la sentencia, la carencia actual de objeto y a prescindir de cualquier orden, con independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991”.

³ Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada).

⁴ Decreto 2591 de 1991, artículo 6: “La acción de tutela no procederá: // (...) 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.”

3.1.2. *Hecho superado.* Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante⁵. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado⁶.

3.1.3. *Acaecimiento de una situación sobreviniente*⁷. Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que a diferencia del escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.”

DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION

Para abordar este Derecho se trae a colación lo expuesto en Sentencia T-206 de 2018, con Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO LINARES CANTILLO:

“El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado la Corte que “(...) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”⁸. En esa dirección también ha sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones⁹: “(i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la

⁵ Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.

⁶ Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

⁷ La Corte empezó a diferenciar, a través de su jurisprudencia, una tercera modalidad de carencia actual de objeto cuando acaece un hecho posterior a la demanda. Por ejemplo las sentencias T-988 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-585 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-200 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada), T-481 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos), entre otras.

⁸ Sentencia T-376/17.

⁹ Corte Constitucional. Sentencia C-951 de 2014.

respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”¹⁰.

9.1. El primer elemento, busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y los particulares en los casos establecidos por la ley, sin que se puedan abstener de recibirlas y por lo tanto de tramitarlas¹¹. Al respecto, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “los obligados a cumplir con este derecho tienen el deber de recibir toda clase de petición, puesto que esa posibilidad hace parte del núcleo esencial del derecho”.

9.2. El segundo elemento implica que las autoridades públicas y los particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber de resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; en otras palabras, implica resolver materialmente la petición. La jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo deber ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”¹². En esa dirección, este Tribunal ha sostenido “que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva”¹³

9.3. El tercer elemento se refiere a dos supuestos. En primer lugar, (i) a la oportuna resolución de la petición que implica dar respuesta dentro del término legal establecido para ello. Al respecto, la Ley 1755 de 2015 en el artículo 14 fijó el lapso para resolver las distintas modalidades de peticiones¹⁴. De dicha

¹⁰ Los elementos han sido reseñados en las sentencias T-814/05, T-147/06, T-610/08, T-760/09, C-818/11, C-951/14, entre otras.

¹¹ Ver sentencias T-737/05, T-236/05, T-718/05, T-627/05, T-439/05, T-275/06, T-124/07, T-867/13, T-268/13 y T-083/17, entre otras.

¹² Sentencias T-610/08 y T-814/12.

¹³ Sentencia T-376/17.

¹⁴ Tal disposición estableció: “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: // 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la

norma se desprende que el término general para resolver solicitudes respetuosas es de 15 días hábiles, contados desde la recepción de la solicitud. La ausencia de respuesta en dicho lapso vulnera el derecho de petición. En segundo lugar, al deber de notificar que implica la obligación del emisor de la respuesta de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo, con el fin que la conozca y que pueda interponer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé o incluso demandar ante la jurisdicción competente. Se ha considerado que la ausencia de comunicación de la respuesta implica la ineficacia del derecho¹⁵. En ese sentido, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “[e]l ciudadano debe conocer la decisión proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de petición, porque ese conocimiento, dado el caso, es presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente” y, en esa dirección, “[l]a notificación es la vía adecuada para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”¹⁶.

CASO EN CONCRETO

En el caso en concreto, pretende la accionante que se ordene a SALUD TOTAL EPS dar respuesta de fondo al derecho de petición de 18 de abril de 2022 radicado por el accionante y atención integral a su salud.

Por otro lado, solicita a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS SA recibir al accionante la solicitud de radicación de documentación para el reconocimiento y pago de incapacidades en favor del accionante.

Ahora bien, se aportó respuesta de parte de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS SA donde se indica no haber vulnerado ningún derecho fundamental del accionante puesto que a la fecha no se ha recibido la solicitud de reconocimiento y pago de incapacidades a que hace referencia adjuntando la documentación necesaria para ello.

entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. // 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. // Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

¹⁵ Sentencia T-430 de 2017.

¹⁶ Esta regla se encuentra enunciada en las sentencias T-249/01, T-1006/01, T-565/01 y T-466/04, entre otras.

Por su parte SALUD TOTAL EPS informa haber dado respuesta a la petición de 18 de abril de 2022 y haber remitido la documentación solicitada; sin embargo, observa este Despacho que en primer lugar esta entidad no aportó ninguna constancia de envío del derecho de petición al accionante ni tampoco copia de la documentación solicitada, únicamente se visualiza certificado en el cual se relacionan las incapacidades ordenadas, transcritas indicando cuales de ellas fueron pagadas y cuales no desde el 25 de marzo de 2021 a la fecha.

En vista de lo anterior, queda claro para este fallador que SALUD TOTAL EPS en efecto vulneró el derecho de petición del accionante MARTIN GUSTAVO VELASQUEZ FLOREZ al no haberse dado respuesta de fondo a cada una de las solicitudes incoadas mediante solicitud radicada el 18 abril de 2022.

Por el contrario, en lo que respecta a la entidad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS SA le asiste razón a la accionada, dado que al no haberse recibido la documentación necesaria para decidir de fondo la solicitud de pago de incapacidades del accionante no se evidencia vulneración a ningún derecho fundamental al señor MARTIN GUSTAVO VELASQUEZ FLOREZ, siendo imposible para este fallador ordenada al FONDO DE PENSIONES reconocer tal prestación económica sin contar con la documentación necesaria para ello y mucho menos desconociendo normas y trámites internos aplicables para proceder sobre este asunto.

Es por esta razón, teniendo en cuenta que el objeto del presente asunto se centra en la respuesta a la petición y la radicación de la documentación que requiere el accionante ante el FONDO DE PENSIONES para que reconozcan y paguen incapacidades a su favor, estima este Despacho que únicamente se vulneró por parte de SALUD TOTAL EPS el derecho fundamental de PETICION, los demás no serán tutelas por no corresponder con el objeto del asunto, ni haberse aportado prueba al respecto.

Por último, no se ordenará atención integral al accionante puesto que en primer lugar no es una pretensión que guarde coherencia con el objeto del presente trámite, ni se logró probar que la accionada SALUD TOTAL EPS se hubiere negado a prestar servicios de salud al accionante, por lo tanto, es inviable ordenar prestación integral de servicios futuros, cuando ni siquiera se ha demostrado la mala fe por parte de la prestadora de salud.

CONCLUSION

Al no tener certeza de que la contestación de fondo al derecho de petición de 18 de abril de 2022, se hubiere enviado a su peticionario junto con toda la documentación requerida, se concederá el amparo constitucional al derecho de petición invocado por la parte accionante.

Por consiguiente, se ordenará dentro del término improrrogable de tres (03) días siguientes al recibido de la comunicación de este proveído a la entidad SALUD TOTAL EPS, dar repuesta de fondo al derecho de petición de 18 de abril de 2022 al accionante **MARTIN GUSTAVO VELASQUEZ FLOREZ**, identificado con la C.C. 91.518.631, a la dirección física o electrónica suministrada en escrito de petición.

De otro lado, se negarán las demás pretensiones y el amparo constitucional de los demás derechos fundamentales invocados, por las razones anteriormente expuestas.

Por lo anteriormente expuesto, el **JUZGADO SEGUNDO LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS DE BUCARAMANGA**—, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de PETICION del señor MARTIN GUSTAVO VELASQUEZ FLOREZ, identificado con la C.C. 91.518.631, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR que dentro del término improrrogable de tres (03) días siguientes al recibido de la comunicación de este proveído a la entidad SALUD TOTAL EPS, dar repuesta de fondo a cada una de las solicitudes impetradas en derecho de petición de 18 de abril de 2022 al accionante **MARTIN GUSTAVO VELASQUEZ FLOREZ**, identificado con la C.C. 91.518.631, a la dirección física o electrónica suministrada en escrito de petición.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones y el amparo constitucional de los demás derechos fundamentales invocados, por las razones anteriormente expuestas.

CUARTO: ADVERTIR a las partes que cuentan con el termino improrrogable de tres (03) días para solicitar impugnación de esta providencia, a partir del recibido de la notificación.

QUINTO: NOTIFICAR Y COMUNICAR a las partes en la forma indicada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: En firme esta providencia, y si no es impugnada, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

El Juez,

CRISTIAN ALEXANDER GARZÓN DÍAZ

Firmado Por:

Cristian Alexander Garzon Diaz

Juez

Juzgado Pequeñas Causas

Laborales 02

Bucaramanga - Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **831b423786ac41927969b04c58abb00ef245fec92c194aad158a148707c2388b**

Documento generado en 16/06/2022 07:48:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>